



Proceso	Ejecutivo
Demandante	Financia YA S.A.S.
Demandado	Juan Diego Mendoza Ochoa
Radicado	05001 31 03 007 2017 00659 01
Instancia	Segunda
Ponente	Juan Carlos Sosa Londoño
Auto	No. 023
Decisión	Revoca
Tema	Medidas cautelares. Bienes adjudicados en proceso de sucesión.
	<p>“Precepto que guardaba coherencia con el aparte final del 615 ibídem, a cuyo tenor «[l]a sentencia (aprobatoria de la adjudicación) se registrará y protocolizará en la forma prevenida para la aprobatoria de la partición.»</p> <p>Nótese como, de forma por demás expresa, el ordenamiento adjetivo citado, que hoy corresponde a los artículos 509 y 513 del Código General del Proceso y que trata los procesos de sucesión, previó forzoso el registro de la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación previamente a la protocolización de tal providencia, lo que se muestra a tono con el artículo 58 del Estatuto de Notariado (Decreto 960 de 1970), al regular que «[c]uando las actuaciones o documentos que deban protocolizarse estén sujetos a registro, esta formalidad se cumplirá previamente a la protocolización.» (Resaltó la Sala).</p> <p>En suma, en el modo de adquirir el dominio denominado sucesión por causa de muerte opera la transmisión del derecho del causante a su heredero, con efecto desde el deceso de aquel, aun cuando la sentencia aprobatoria de la adjudicación o partición siempre sea acto declarativo posterior, providencia que carece de alcances traslaticios, pero que debe ser inscrita si recayó sobre bienes inmuebles previamente a su protocolización notarial”.</p>

2023-113

TRIBUNAL SUPERIOR

SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN

Medellín, treinta (30) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Se decide el recurso de apelación interpuesto por la sociedad Financia YA S.A.S., frente al auto del 2 de noviembre de 2023, proferido por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Medellín, dentro del proceso ejecutivo que adelanta en contra Juan Diego Mendoza Ochoa, mediante el cual se negó el decreto de una medida cautelar.

I. ANTECEDENTES

1. Ante el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de sentencias de Medellín, se tramita proceso ejecutivo singular promovido por Financia YA S.A.S. en contra de Juan Diego Mendoza Ochoa.

2. El apoderado de la parte actora solicitó el embargo y secuestro de todos los derechos adjudicados al demandado y los que se llegaren adjudicar, en el proceso de sucesión doble e intestada de Rodrigo Humberto Mendoza Meneses y Ana Cecilia Ochoa de Mendoza adelantado en el Juzgado Promiscuo de Familia de Andes (Ant.), bajo el radicado 05001-31-10-001-2022-00156-00; aclaró que a la fecha no se había dado trámite a la protocolización del trabajo de partición, ni a la sentencia que la aprobó, por tanto los bienes aún no figuran, registralmente, a nombre del ejecutado. (archivo 17, C- Medidas cautelares)

3. Por auto del 21 de septiembre de 2023 se decretó la cautela y se dispuso comunicarla al juzgado cognoscente de la sucesión (archivo 18 ib.)

4. Recibido el oficio respectivo, el despacho judicial destinatario informó que el 14 de junio de 2023 se había proferido sentencia aprobatoria de la partición, por lo que no era posible dar cumplimiento a la medida cautelar. (archivo 24, ib.)

5. Pese a lo anterior, la parte actora nuevamente solicitó la misma medida cautelar, advirtiendo que la situación era la misma, es decir, sin registro y protocolización de la partición. (archivo 27)

6. Por auto del 2 de noviembre de 2023 se negó la solicitud, en razón de que los bienes inmuebles referidos en la petición embargo no figuran como de propiedad del demandado (numeral 1º del artículo 593 del C. General del Proceso) (archivo 28, ib.)

7. Oportunamente la parte convocante interpuso recurso de reposición y subsidiariamente apelación, con fundamento en que

(i) En el caso de los derechos de sucesión, *“los mismos son adquiridos mediante el título de herencia y el modo de sucesión por causa de muerte”* –sic-. Por lo anterior, el demandado adquirió los derechos que se persiguen, por el modo de la sucesión por causa de muerte, los cuales correspondieron por su título como heredero, no obstante, éste no ha llevado a cabo el registro de la sentencia que aprobó la partición y adjudicación, por lo que esos bienes no pueden quedar en el “limbo”.

(ii) Es el juez quien está facultado para determinar si jurídicamente los bienes pueden ser objeto o no de medidas cautelares y la Oficina de Instrumentos Públicos es quien debe verificar los temas relacionados con el registro.

(iii) El Despacho accedió a la medida que ahora se niega, mediante auto 2906V del 28 de septiembre de 2023, en el que se decretó el embargo de los derechos que correspondieron al demandando dentro de la ya referida sucesión.

(iv) Que, si el Despacho considera que la medida cautelar en este caso no es el embargo, sino, que sería una medida innominada sobre los derechos adjudicados al accionado, solicita se decrete la misma. (archivo 29)

8. En proveído de 27 de noviembre pasado se resolvió desfavorablemente la impugnación horizontal con fundamento en que la efectividad de la cautela dispuesta en el numeral 1º del artículo 593 Ibídem, hace necesario que el demandado sea el titular inscrito de los bienes inmuebles y aunque el registrador de instrumentos públicos tiene la facultad de registrar o no la medida cautelar, también lo es que los bienes no están inscritos a nombre del demandado, pues así lo informó la misma parte demandante,. (archivo 31)

9. Concedida la impugnación vertical, el expediente fue remitido a la corporación, la que decide lo pertinente, previas las siguientes

II. CONSIDERACIONES

1. Las medidas cautelares se perfilan a garantizar la satisfacción de los derechos reconocidos por la autoridad judicial, precisamente, para asegurar el cumplimiento efectivo de la sentencia. En ese orden, el perfeccionamiento de las cautelas demanda del juzgador un papel activo frente al desarrollo de las mismas, pues al director del proceso corresponde velar porque esas órdenes se desenvuelvan dentro de los parámetros reglados

por el legislador, de cara a la necesidad y proporcionalidad de las mismas.

En tratándose de cautelas está fuera de duda que el acreedor por mandato de los artículos 2488 y 2492 del C. Civil, pueden acudir a ellas con el fin de asegurar los bienes y pretender la realización de su crédito, junto a los intereses y gastos de cobranzas¹.

2. Cuando se trata de bienes por el modo de la sucesión por causa de muerte, la Corte en sentencia SC1833 de 2022, precisó:

En cambio, la sucesión por causa de muerte corresponde a la forma como el sucesor adquiere los bienes del causante, *«... que, además, no se consolida en forma instantánea sino que requiere de hechos tales como el deceso de la persona, la delación y la aceptación de su herencia, así como la adjudicación de ésta en una partición aprobada e inscrita en los registros respectivos, como aquí ocurrió.»* (CSJ SC de 27 sep. 2013, rad. 2005-00488).

Itérase, porque viene el caso, que la delación es el llamado que, como consecuencia de la muerte de una persona, hace la ley o el testador -en caso de voluntad testamentaria- a quien tiene vocación hereditaria para que acepte o repudie la asignación que pudiese corresponderle (CSJ SC de 18 jun. 1998, rad. 4899; SC973 de 2021, rad. 2012-00222).

Es decir que, en el modo de adquirir el dominio denominado sucesión por causa de muerte, la partición realizada en el juicio no tiene efectos traslaticios, en la medida en que tal consecuencia corresponde únicamente al modo de la tradición (art. 740 C.C.), *«...cada uno de ellos (los modos de adquirir el dominio) se basta así mismo en el ámbito que le concierne. Por ello ni el registro del decreto de posesión efectiva de la herencia, ni el de la sentencia aprobatoria de la partición, juegan papel de tradición, como tampoco el de la sentencia que declara haber sido adquirido un bien por prescripción, ni el de la resolución gubernamental sobre adjudicación de tierras baldías: para*

¹ SC3930-2020

adquirir, en estos últimos casos, basta la ocupación (art. 1º, ley 200 de 1936) y la usucapión, como en aquéllos la sucesión por causa de muerte, esto es, la transmisión directa del de cujus al heredero. La tradición nada tiene que hacer: aquellos modos actúan en los campos que les son propios y exclusivos.» (CSJ SC de 31 oct. 1995, Gaceta Judicial LXXXI, pág. 506).

Precisamente, el inciso inicial del artículo 1401 del Código Civil consagra que *«[c]ada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión»*, al paso que el precepto 779 de la misma obra prevé que *«[c]ada uno de los partícipes de una cosa que se poseía proindiviso, se entenderá haber poseído exclusivamente la parte que por la división le cupiere, durante todo el tiempo que duró la indivisión.»*

En otros términos, la transmisión del causante a su heredero a través de la adjudicación o partición llevada a cabo en el juicio sucesorio tiene efecto retroactivo a partir del día de deceso de aquel, lo cual traduce que tal distribución no tiene alcances traslaticios.

Pensar lo contrario implicaría afirmar que en el interregno entre la muerte y el reparto de bienes se configuró el traslado de la masa herencial a una comunidad indivisa y que cada heredero, a su vez, entrega a los demás coherederos los bienes dejados por el causante, poseídos proindiviso, una vez aprobada la sentencia de partición. Nada más desacertado si se tiene en cuenta que es el de cujus quien transmite.

Los preceptos citados consagran, entonces, una ficción legal en virtud de la cual durante el periodo de indivisión, surgido a raíz del deceso del propietario, los partícipes del patrimonio ilíquido no tuvieron parte en los bienes a la postre adjudicados a los demás herederos, como si desapareciera, *per se*, la posesión proindiviso que ejercieron.

Precisamente doctrinó esta Corporación que:

«...reunidos los elementos constitutivos expresados, el derecho de herencia se fija definitivamente en cabeza del heredero, radicado desde la delación en forma condicional. El modo de sucesión ha operado; en cabeza del sucesor existe, como elemento positivo, el

derecho hereditario, patrimonial, individualizado y autónomo, de tal manera que cuando sobreviene la partición, no es para transferir al heredero un derecho que ya tiene y en ejercicio del cual interviene en ella, sino para liquidar la comunidad universal hereditaria y poner término a la indivisión, distribuyendo los bienes entre los copartícipes a prorrata de su derecho, con efecto desde el día de la muerte. De esta manera la época de indivisión desaparece y entre la propiedad exclusiva del causante y la propiedad exclusiva del causahabiente no hay solución de continuidad: el último no es sino continuador de la persona del primero, quien dejó de serlo desde la muerte. (...) De esta forma, la partición del acervo hereditario no es un modo de adquirir de la sucesión mortis causa, paso necesario en la liquidación de la herencia, extinción de la comunidad hereditaria y a la vez eslabón destinado a ajustar la cadena de los títulos del antecesor con el título del causahabiente. El artículo 673 no lo menciona entre las formas jurídicas de adquirir. Los trámites todos del juicio mortuario tienden a realizar a hacer efectivo, el mencionado modo de poner en el patrimonio de la persona los bienes del sujeto que ha muerto». (CSJ SC de 31 oct. 1955, G.J. LXXXI, 506 y s.s.; reiterada en SC de 22 abr. 2002 y SC de 27 sep. 2013, rad. 2005-00488).

En consonancia con lo anterior destaca como, en el ámbito del derecho procesal, el juicio de sucesión hacía parte de la Sección Tercera del Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil, al igual que en el vigente Código General del Proceso, esto es, concierne a los procesos de liquidación, mas no a los juicios declarativos, regulados en la Sección Primera del aludido Libro.

Así las cosas y como quiera que la sucesión por causa de muerte exige para que opere el deceso de la persona titular de los bienes, la delación y la aceptación del heredero, la partición o adjudicación no transfiere el dominio, sino que corresponde a un acto procesal integrador de ese modo de transmitir tal derecho real, con efectos retroactivos a partir de la fecha del deceso del causante.

Por contera, la sentencia que aprueba la partición o adjudicación pone fin a la comunidad universal, mediante la distribución del patrimonio entre los herederos reconocidos, de donde sus efectos son meramente declarativos, en tanto y en cuanto se limitan a reconocer un derecho preexistente.

Precisamente la Sala tiene dicho que «...*la partición realizada en el juicio de sucesión no tiene efectos constitutivos respecto al derecho de dominio de los bienes objeto de ella, sino meramente declarativos, porque la partición es ‘...un negocio jurídico de carácter declarativo con efectos retroactivos, según se deduce de lo dispuesto por el artículo 1401 del C.C.’ (CSJ, G.J. CCXXVIII, Vol. I, 661), mandato que regula los efectos jurídicos de la partición al señalar que ‘[c]ada asignatario se reputará haber sucedido inmediata y exclusivamente al difunto, en todos los efectos que le hubieren cabido, y no haber tenido jamás parte alguna en los otros efectos de la sucesión’.*» (CSJ SC973 de 2021, rad. 2012- 00222).

Consecuente con tal instituto, el artículo 611 del Código de Procedimiento Civil vigente para la época, regulaba, en su numeral 7, aludiendo al proveído aprobatorio de la partición, que «*[l]a sentencia que verse sobre bienes sometidos a registro será inscrita, lo mismo que las hijuelas, en las oficinas respectivas, en copia que se agregará luego al expediente. En la sentencia aprobatoria de la partición el juez ordenará la protocolización del expediente en la notaría del lugar del proceso que los interesados hubieren señalado, y en su defecto en la que el juez determine.*»

Precepto que guardaba coherencia con el aparte final del 615 ibídem, a cuyo tenor «*[l]a sentencia (aprobatoria de la adjudicación) se registrará y protocolizará en la forma prevenida para la aprobatoria de la partición.*»

Nótese como, de forma por demás expresa, el ordenamiento adjetivo citado, que hoy corresponde a los artículos 509 y 513 del Código General del Proceso y que trata los procesos de sucesión, previó forzoso el registro de la sentencia aprobatoria de la partición o adjudicación previamente a la protocolización de tal providencia, lo que se muestra a tono con el artículo 58 del Estatuto de Notariado (Decreto 960 de 1970), al regular que «*[c]uando las actuaciones o documentos que deban protocolizarse estén sujetos a registro, **esta formalidad se cumplirá previamente a la protocolización.***» (Resaltó la Sala).

En suma, en el modo de adquirir el dominio denominado sucesión por causa de muerte opera la transmisión del derecho del causante a su heredero, con efecto desde el deceso de aquel, aun cuando la sentencia aprobatoria de la adjudicación o partición siempre sea acto declarativo posterior, providencia que carece de alcances

traslaticios, pero que debe ser inscrita si recayó sobre bienes inmuebles previamente a su protocolización notarial.

3. Atendiendo el anterior prolegómeno jurisprudencial está claro que aprobada la sentencia de partición y adjudicación como lo informa el recurrente, resulta viable el decreto de la cautela, quedando a cargo del acreedor, para lo fines que persigue, el registro que los interesados en la sucesión se niegan a realizar para dar fe de la cadena ininterrumpida de propietarios.

El mismo recurrente ha manifestado expresamente que ante el decreto inicial de embargo, una vez comunicada la anterior decisión dicha dependencia judicial manifestó que no tomaba nota, por cuanto el citado trámite de sucesión había terminado con anterioridad, que

“A la fecha no se ha dado trámite a la protocolización del trabajo de partición, el cual fue suscrito y coadyuvado por todos los herederos, ni a la sentencia que lo aprobó –sic-. Por lo anterior, los bienes aún no figuran registralmente a nombre del demandado, pero es claro que, para el momento de esta solicitud, se trata de derechos reales de propiedad...

“Una vez decretados los embargos, se realizará todo lo necesario ante las oficinas de registro para que puedan inscribirse: **(i)** la sentencia que aprobó el trabajo de partición y **(ii)** el oficio que libre el Despacho para la comunicación del decreto de la medida cautelar que se solicita...

“Con anterioridad, han sido allegados al juzgado los siguientes anexos:

“1. Providencia de fecha 14 de junio de 2023, la cual aprueba el trabajo de partición.

“2. Trabajo de partición coadyuvado por todos los herederos”.
(Negritas y subrayas propias del texto, archivo 27)

5. Por lo anterior, el auto impugnado será revocado, y en su lugar se dispondrá, la cautela echada de menos.

III. DECISION

Por lo expuesto el **Tribunal Superior de Medellín en Sala Unitaria Civil de Decisión, REVOCA** el auto apelado de fecha y naturaleza indicada en la parte motiva de esta providencia, y en su lugar se dispone, el decreto del derecho de dominio que en común y proindiviso o totalmente le fue adjudicado al demandado Juan Diego Mendoza Ochoa en el proceso de sucesión doble e intestada de Rodrigo Humberto Mendoza Meneses y Ana Cecilia Ochoa de Mendoza tramitado por el Juzgado Promiscuo de Familia de Andes (Ant.), Rdo. 05001-31-10-001-2022-00156-00, en el que se profirió sentencia aprobatoria de la partición proferida el día 14 de junio de 2023. La Secretaría del juzgado cognoscente del proceso ejecutivo librará los oficios respectivos.

NOTIFIQUESE

JUAN CARLOS SOSA LONDOÑO
Magistrado

Firmado Por:
Juan Carlos Sosa Londono
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 001 Civil
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,

conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **09c4f5cab2dc4841f1b2dd5aeca4abb8cd77082c544df793c3f8ccb4265f2a96**

Documento generado en 30/04/2024 03:31:56 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>